

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	OFELIA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ ESCOBAR
LITISCONSORTES	COLPENSIONES Y PROTECCIÓN
PROCEDENCIA	JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-006-2020-00096-01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN
TEMAS Y SUBTEMAS	- Ineficacia de Traslado de Régimen
DECISIÓN	REVOCA

SENTENCIA No. 255

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL, según consta en Acta N°035 de 2023, se procede a dictar sentencia en orden a resolver el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte **DEMANDANTE**, en contra de la Sentencia N° 203 del 25 de agosto de 2023, proferida por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

Se reconoce personería a la abogada **ÉRICA ARISTIZABAL MARÍN**, identificada con T.P. No. 270.135 del C.S. de la J. para que actúe como apoderada sustituto de **COLPENSIONES**, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible a folio 1 Archivo 03 ED Tribunal.

ANTECEDENTES

La señora **OFELIA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ ESCOBAR**, presentó demanda ordinaria laboral en contra de **COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.**, con el fin de que: **1)** Se declare la nulidad o ineficacia del traslado que realizó del RPMPD hacia el RAIS administrado por **PROTECCIÓN S.A.** **2)** Como consecuencia de lo anterior, que se ordene a **PROTECCIÓN S.A.** trasladar a **COLPENSIONES** el saldo de la cuenta de ahorro individual, cotizaciones y rendimientos devengados durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada. **3)** Por último, solicitó condenar en costas a las demandadas.

Como sustento de sus pretensiones, indica la accionante que el 01 de enero de 1983 se afilió al entonces ISS, para trasladarse posteriormente de régimen pensional con ocasión de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, hacia el RAIS, en el mes de abril de 1999, afiliándose a **PROTECCIÓN S.A.** donde se encuentra en la actualidad; indica que al momento de hacer el traslado, el asesor la convenció de efectuarlo, indicándole que en dicha entidad tendría mejores beneficios económicos tales como mejor rentabilidad y una pensión más favorable que la que le podrían ofrecer en el fondo público.

De otro lado manifiesta que, al consultar cual podría ser su pensión en **PROTECCIÓN S.A.**, el 10 de enero de 2020 le indica la entidad que, cumpliendo con los requisitos, su eventual pensión posiblemente sería de un salario mínimo legal mensual vigente, es así que el 21 de enero de la anualidad referenciada, la entidad le hizo entrega de una proyección pensional, informándole que para el año 2021, a sus 60 años su mesada alcanzaría la cifra de **\$986.635**.

Señala la demandante que, al realizar la proyección bajo las reglas del régimen de prima media, para el año 2020 y a sus 59 años incluso dejando de cotizar, tendría derecho a una mesada pensional de **\$2.082.330**, superando con creces la estimada por **PROTECCIÓN S.A.**

Finalmente sostiene que, al momento de solicitar el traslado de régimen ante **COLPENSIONES**, este le informa que su solicitud no era viable por estar a menos de diez años de cumplir los 57 años de edad.

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS

La demandada **PROTECCIÓN S.A.** se opuso a lo pedido, tras considerar que la decisión del demandante de trasladarse de régimen fue válida, exentas de vicios del consentimiento y de cualquier fuerza. Propuso las excepciones de mérito de: “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, RECONOCIMIENTO DE RESTITUCIÓN MUTUA EN FAVOR DE LA AFP: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER EL SEGURO PREVISIONAL CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA Y PORQUE AFECTA DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE.* (...)” (f. 3 a 21 Archivo 05 ED).

A su turno, **COLPENSIONES** resistió las pretensiones del gestor, proponiendo como excepción la de: “(...) *CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA, INEXISTENCIA DE VICIO EN EL CONSENTIMIENTO, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, INEXISTENCIA DEL DERECHO DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA ADMINISTRADO POR COLPENSIONES, FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR, FALTA DE INTERÉS EN SU VIDA PENSIONAL, BUENA FE DE COLPENSIONES, MALA FE, DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN-SEGUROS PREVISIONALES- COMISIONES. INDEXADOS., IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, PRESCRIPCIÓN Y COMPENSACIÓN* (...)” (f. 2 a 19 Archivo 06 ED).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante Sentencia N° 203 del 25 de agosto de 2023, denegó las pretensiones incoadas por la señora **OFELIA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ ESCOBAR** en contra de **COLPENSIONES** y **PROTECCIÓN S.A.** Gravó en costas al demandante.

Desde el inicio de su decisión, la Juez de primer grado expuso que según su criterio, dentro de esta clase de asuntos, no encontraba ningún fundamento legal para declarar la ineficacia del traslado, resaltando que el traslado de régimen se dio de acuerdo con lo precisado en el marco legal, determinación que por años ha producido todos los efectos para las partes; anota que el hecho que se alegue el incumplimiento del deber de información, o que en el otro régimen la mesada pudiera llegar a ser mayor a la ofrecida en el RAIS, no se le ofrecen como suficientes para tener el traslado como ineficaz, más cuando por disposición del artículo 48 CN, se establece que los requisitos para acceder a las pensiones son los establecidos en la ley, todo en procura de la garantía de sostenibilidad del sistema; añadiendo que los recursos del RPMPD

no pueden subsidiar afiliados que por años acumularon capitales en el RAIS, régimen en el cual están protegidos en los riesgos de invalidez o muerte.

De igual forma expuso que, no es viable que solo cuando están cerca a la edad de pensión, y con la certeza de poder tener una pensión mayor en el RPMPD, soliciten judicialmente la declaratoria de ineficacia al RAIS, aduciendo falta de información, sin ningún esfuerzo probatorio.

Reforzó sus planteamientos el *a-quo*, a partir de lo señalado en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, precisando las características de los regímenes pensionales existentes y las condiciones para su selección, afiliación y traslado. En ese sentido anotó que, en los términos del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, la ineficacia del traslado surge cuando se coarta la voluntad del afiliado y no por una motivación equivocada.

De ahí que señaló, en el caso de la demandante, conforme lo señalado en su interrogatorio de parte, fue la decisión libre y voluntaria de esta lo que la llevó a cambiarse al RAIS, pretendiendo regresar al RPMPD ahora que ve la posibilidad de tener una mesada más alta, lo que no constituye un presupuesto para la ineficacia solicitada, más cuando ha desplegado actos de pertenencia que dan cuenta de su conocimiento sobre el RAIS.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la PARTE DEMANDANTE, ataca la decisión de primera instancia, aduciendo que incurre en yerro la juez de instancia en su decisión, pues no tiene en cuenta lo decantado por la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema en similares casos como el estudiado, al considerar que la carga de las prueba en estos procesos de ineficacia del traslado se invierte y es a los fondos pensionales a quienes les corresponde demostrar que obraron con total diligencia, suministrando al posible afiliado una debida y adecuada asesoría, pues son ellos los que tienen el conocimiento técnico para hacerlo.

Acto seguido, alega que en este caso, la consideración de la Juez de primera instancia carece de un análisis juicioso respecto del actuar del fondo privado, pues con la liquidación aportada se evidencia que el RPMPD administrado hoy por **COLPENSIONES** siempre le fue más beneficioso a su poderdante, omitiendo la AFP **PROTECCIÓN S.A.**, exhibir la información que requería la accionante para tomar la decisión que más le convenía, reiterando que es a las AFP a quienes les corresponde probar que en efecto ilustraron las ventajas y desventajas de los diferentes regímenes pensionales, trayendo a colación la Sentencia SL 1688 de 2019, entre otras.

Es por lo esbozado que solicita se revoque la Sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones invocadas en el escrito de demanda.

El presente asunto se estudiará igualmente en virtud del GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA en favor de **COLPENSIONES** conforme lo dispone el artículo 69 CPTSS.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legal establecido la apoderada de **COLPENSIONES** señaló que, el traslado que realizó la accionante a la AFP Protección S.A. desde abril de 1999 lo hizo conforme a la legislación que regulaba la materia, es decir, el artículo 13 de la ley 100 de 1993, en su versión original por lo tanto se realiza dentro de la legalidad debiendo ser absuelta y representada de alguna condena pues no es posible que asuma las consecuencias de actos de terceros (Archivo 03 ED).

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver gravita en establecer si se demostró en el plenario que **PROTECCIÓN S.A.** cumplió con el deber legal de brindarle información relevante, precisa y completa a la parte actora al momento de su traslado al fondo del RAIS; o si, por el contrario, hay lugar a declarar la ineficacia de la afiliación y sus efectos respecto de las administradoras llamadas a juicio.

Así mismo, se validará si hay lugar a la devolución de los gastos de administración y demás emolumentos y si operó el fenómeno prescriptivo frente a la acción incoada.

Se procede entonces a resolver tales planteamientos, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que, en atención a lo normado en el artículo 66A CPT y SS, la decisión de esta instancia se circunscribe a los asuntos materia del recurso de apelación, restricción a la competencia funcional del fallador de segundo grado, que impone el deber de decidir estrictamente dentro del marco fijado en la alzada (SL2808-2018), con la salvedad hecha para los derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador (SL8613-2017 y SL12869-2017), según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003.

Se destaca que no es materia de debate dentro del presente asunto:

- (i) Que la señora **OFELIA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ ESCOBAR** estuvo afiliada en pensiones al ISS, efectuando cotizaciones entre los años 1988 y 1999 (f. 146 a 157 Archivo 06 ED).
- (ii) Que el 15 de febrero de 1999 la demandante decidió trasladarse al RAIS administrado por la AFP **PROTECCIÓN S.A.**, fondo al que se encuentra afiliada en la actualidad (f. 29 y 42 Archivo 10 ED).
- (iii) Que la actora radicó ante **COLPENSIONES** solicitud de traslado de régimen pensional, petición negada por esa entidad en comunicado del 04 de febrero de 2020 (f. 13 Archivo 01 ED).

DE LA INEFICACIA DEL TRASLADO

Pasando al asunto *sub-judice* es necesario rememorar que la Ley 100 de 1993 reformó de manera estructural el sistema pensional colombiano, dando lugar a la existencia de un sistema dual de pensiones obligatorias: el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

Este último pasó a ser gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales quedaron encargadas, entre otras cosas, de atender todo el proceso de afiliación al sistema de las personas que ingresan al mercado laboral, y también a prestar asesoría pre-pensional como obligación en caso de requerir información para modificar expectativas pensionales.

Se dispone en el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, que los trabajadores tienen la opción de elegir «libre y voluntariamente» aquel de los regímenes que mejor le convenga y consulte sus intereses, y en caso de ser obstruida esa libertad por el empleador o cualquier otro actor, tal conducta puede ser objeto de sanciones.

En consonancia con ello, el artículo 271 prescribe para las personas jurídicas o naturales que impidan o atenten en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social, sanción consistente en

multas, sin perjuicio de la ineficacia de la afiliación.

Para la jurisprudencia del Órgano de Cierre, la expresión *libre y voluntaria* del literal b), artículo 13 de la Ley 100 de 1993, necesariamente *presupone conocimiento*, lo que solo puede alcanzarse cuando son conocidas plenamente las consecuencias de una decisión de esta índole (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ SL 3719-2021).

En ese sentido ha discernido la Corte que no puede alegarse *«que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito»* (CSJ SL 1442-2021, CSJ SL40161-2021 que rememoran la CSJ SL12136-2014).

En línea con lo precedente, el Decreto 663 de 1993, *«Estatuto Orgánico del Sistema Financiero»*, aplicable a las AFP desde su creación, impone en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de *«suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado»*.(Negrilla fuera de texto).

Como se desprende de lo expuesto, desde su génesis las sociedades administradoras de fondos de pensiones se hallaban en el deber de garantizar una afiliación *libre y voluntaria*, proporcionando al afiliado una información suficiente y transparente que le permitiera elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, la que mejor se ajustara a sus intereses (CSJ SL 1688-2019).

La explotación económica de un servicio relativo a la seguridad social de las personas impone el respeto debido, inspirado en los principios de prevalencia del interés general, transparencia y buena fe, por la transcendencia que comporta la decisión de traslado de régimen pensional, dada su repercusión en la consolidación y acceso al posterior derecho pensional, de carácter fundamental; de ahí que, no se trataba simplemente de captar personas incautas, mediante el ofrecimiento de unos servicios, con promesas vanas, sin importar las repercusiones que le pudiese traer en el futuro pensional (CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017 y CSJ SL1688-2019).

Como lo ha ilustrado el Alto Tribunal, la información necesaria a la que se alude en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de forma que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones (CSJ SL1452-2019).

Lo anterior implicaba a las AFP, realizar un ejercicio ilustrativo para el afiliado, mediante el cotejo o comparación de las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, en un lenguaje comprensible para aquellos (CSJ SL1452-2019, reiterada entre otras, en CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019).

En ese sentido ha prevenido la Máxima Corte de Casación Laboral que, la sola firma consignada en el formulario de afiliación, con la declaración impresa acerca de que la decisión fue libre, espontánea y sin presión, no emerge suficiente para entender que fue una decisión informada, pues solo es indicativa de que al momento de signar el documento no hubo apremio o presión, y no que se trató de una voluntad expresada bajo un conocimiento pleno de las consecuencias que le acarrearía al implicado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, CSJ SL4964-2018, CSJ SL12136-2014, reiterada en CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJ SL2877-2020).

Desprendiendo de lo antedicho, que la mera suscripción del formulario no satisface la carga demostrativa atinente al cumplimiento de ese deber de ilustración a cargo de las administradoras del régimen de ahorro individual, del ofrecimiento de una información completa sobre las ventajas, desventajas y consecuencias del traslado o afiliación a dicho régimen, imponiéndose la demostración del cumplimiento de tal débito por cualquiera de los medios suasorios que lleven al juez la convicción de que en efecto, se atendió cabalmente con la carga que les correspondía (CSJ SL1688-2019, CSJ SL3778-2021, CSJ SL 5595-2021).

Se ha decantado por el Alto Tribunal que, el acto de traslado de régimen es abordado desde el instituto de la ineficacia y no desde la nulidad, centrándose el análisis de la libertad afiliación en la constatación del deber de información y no de los vicios del consentimiento, puesto que la forma de atentar contra el derecho del trabajador a una afiliación libre se identifica en la omisión de brindar la información necesaria, suficiente y objetiva sobre las consecuencias de su traslado de régimen pensional. (CSJ SL2208-2021)

Y en la sentencia CSJ SL3706-2021, la corporación sostuvo que, el fundamento para la declaratoria de ineficacia parte de un conjunto normativo de carácter especial que regula la afiliación en seguridad social en pensiones, y lo relativo a la calidad y oportunidad de la información ofrecida por la AFP, que debe preceder ese acto afiliación, todo lo cual al tenor del artículo 43 CST, que dispone dejar sin efectos las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con la ley, laudos, pactos, convenciones colectivas y reglamentos de trabajo, excluyen la remisión a otros dispositivos normativos de la legislación civil, para evaluar el contenido volitivo del acto de afiliación, de ahí que no se deba acudir a esta normativa para evaluar la presencia de los vicios del consentimiento que aquella preceptúa.

En ese contexto, resáltese que, la jurisprudencia también ha adocinado que en casos como el estudiado, conforme lo estipulado en el artículo 167 CGP, ante la existencia de “*afirmaciones o negaciones indefinidas*”, se da la inversión de la carga de la prueba, debiendo acreditar la contraparte el hecho definido, siendo una obligación de la AFP, demostrar la diligencia en el acatamiento del deber de información con el afiliado (CSJ SL1688-2019, memorada en providencias CSJ SL5680-2021, CSJ SL 4803-2021 y CSJ SL1440-2021), presupuesto que, en palabras de la Sala de Casación Laboral de la CSJ “(...) garantiza el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio de las partes, del artículo 48 del CPTSS, en tanto hace posible la verificación de los hechos que, para quien los alega, es imposible acreditar (...)” (Sentencia SL2817-2019). (Subraya de la Sala).

De ahí que, no puede pretenderse que el afiliado acredite tales aspectos o esté informado de las condiciones de cada uno de los regímenes pensionales, puesto que las normas que rigen a los Fondos Privados imponen el deber de información es a estos, dada su calidad de gestores profesionales del sistema financiero en el área pensional, razón suficiente para que sean ellos los obligados a precisar las pruebas que acrediten la asesoría brindada.

De acuerdo con lo anterior, para la Juez de primer grado no hubo motivo para declarar la ineficacia del traslado solicitada, al ser este un acto jurídico que por años produjo efectos legales, sin que pueda cimentarse en la posibilidad de una mejor mesada en otro régimen o la falta de información profesional a la potencial afiliada, como quiera que la sanción de esta circunstancia, de ningún modo se puede trasladar al fondo público, transfiriéndole la obligación para que con sus recursos subsidie a los afiliados del RAIS, los cuales por décadas estuvieron vinculados a esta, realizando actos de pertenencia para reafirmar su intención de permanecer atada a dicho régimen.

A lo decidido se opuso la parte actora, quien dentro de su alzada arguyó que el traslado de régimen se dio con total desconocimiento de los beneficios, pese a que, como lo ha dicho la Jurisprudencia, las AFP tienen la obligación profesional de brindar una información clara, completa y precisa sobre las implicaciones de su decisión, actuación de la que no aportó pruebas el fondo demandado.

Puestas las cosas de ese modo, de entrada, anota la Sala que no comparte la conclusión que llevó al *A-quo* a una decisión absolutoria en sede de primer grado, por las razones que se pasan a exponer.

Lo primero a resaltar es que la jurisprudencia decantada del Alto Tribunal de Casación se ha dedicado al análisis de esta situación desde hace un buen tiempo, llegando a la conclusión que en definitiva, no se pueden hacer recaer en el afiliado los efectos adversos de una mala gestión por parte de las administradoras de fondos de pensiones, a quienes les asistía la obligación de ofrecer una información clara, precisa, completa a los usuarios, en orden a que estos pudiesen decidir, entre los dos posibles regímenes pensionales vigentes, cuál era el que más les convenía, según sus particulares condiciones, situación que no se dio así, o por lo menos ello no se probó, siendo la consecuencia de tal situación, por expreso dispositivo legal, la ineficacia de tal acto de escogencia, por la gravedad que aparea para el afiliado, el haber adoptado una decisión de la mayor trascendencia para él, con desconocimiento de las consecuencias de ello.

Y es el mismo legislador, quien advirtiendo la falencia tan grave que representa esta situación, le atribuye la consecuencia de la ineficacia, para dejar en libertad al usuario, de poder corregir una decisión que afecta sus derechos prestacionales de raigambre constitucional, sin que quepa admitir la convalidación posterior, por actos que se dicen de refrendación o ratificación en el régimen, pues no cabe ello frente a un acto que se afectó en su validez inicial, al punto de tenerse como inexistente.

Tampoco cabe soslayar la pretensión de declaratoria de ineficacia, basado en el hecho de que esta se funda en un mayor valor pensional, pues es un hecho cierto que desde un principio ese podía ser el escenario en el RPMPD, para el que se establecen unos parámetros precisos definidos en la ley, en cuanto a edad y semanas, e ingreso base de liquidación, que se calcula a partir del 100% del IBC, al que se le aplica la respectiva tasa de reemplazo, según el número de semanas; lo que difiere sustancialmente de lo establecido para el RAIS, donde la prestación va a depender del capital que exista en la cuenta de ahorro individual, por lo que para alcanzar la prestación que le hubiere correspondido en el RPMPD, requería unas condiciones particulares de rentabilidad, tipo de prestación seleccionada, conformación de grupo familiar etc., aunado al hecho que para las mujeres, en caso de contar con bono pensional, este tendría una fecha de redención posterior a la edad pensional, situación que afectaría la disponibilidad de estos recursos en esta última fecha.

Es de ahí que al omitir tales precisiones, al no haber explicado en detalle a la aspirante a afiliada las implicaciones de su selección, se coartó su posibilidad de elegir de manera libre y voluntaria el régimen pensional, y quizás nunca hubiere optado por el traslado, o por lo menos ha debido dejársele expuestas las implicaciones para que fuese el quien tomase la decisión, y no solo exponerle las ventajas relativas al RAIS, escenario en el que precisa la ley, que se tiene como carente de voluntad y aparea la consabida ineficacia.

Conforme a lo anterior, analizado el caso concreto se advierte que, de las pruebas allegadas al expediente, especialmente el formulario de afiliación de la demandante a la AFP **PROTECCIÓN S.A.** (f. 29 Archivo 10 ED), nada se logra extraer con respecto a la información brindada sobre las consecuencias que le acarrearía el traslado del RPMPD al RAIS, las diferencias existentes entre dichos regímenes, ni la forma en que se liquida la pensión de vejez en uno y otro.

De igual modo, reexaminado el interrogatorio practicado a la demandante (Min. 17:24 a 3418 Archivo 16 ED), encuentra la Sala que en dicha oportunidad aquella expresó que su traslado al RAIS sucedió en el año 1999, época en la que rondaba la noticia de la posible liquidación del ISS, por lo que decidió recibir a los asesores de la AFP en su sitio de trabajo, confirmándole tal información, con la sugerencia de afiliarse a esa entidad. No obstante, expuso que no le fue dada ninguna información relevante, ni siquiera sobre requisitos

pensionales, y el tiempo límite que tenía para trasladarse de nuevo al RPMPD. Que no leyó el formulario de afiliación, dada la recomendación del asesor para vincularse. Adicional a que, pese a que le entregaron extractos con información de su cuenta de ahorro individual, nunca le fue brindada una información adecuada para entender el contenido de ellos.

De la probanza remembrada, y, en contravía de lo considerado por el *A quo*, aunado a que las manifestaciones de la demandante no pueden considerarse como confesión en los términos del artículo 191 CGP, probatoriamente en el proceso no hay como extraer que por parte de **PROTECCIÓN S.A.** se cumplió con el deber de información, en tanto es imposible constatar la provisión de otros datos relevantes y suficientes de cara al funcionamiento de los regímenes pensionales, de donde pudiera derivarse un consentimiento meridianamente informado (Art. 97 Decreto 663 de 1993), pues precisamente este aspecto, como se dijo, es el protegido por la Jurisprudencia, resaltando en Sentencia SL3853-2022:

“(…) En torno a tal tópico la Sala ha adocinado que el afiliado tiene la facultad de optar por uno u otro régimen, pero que ello debe hacerlo en forma libre, espontánea y sin presiones, características que no se tipifican por la manifestación pura y simple del traslado; en tanto se requiere de la ilustración completa, diáfana y comprensible sobre las consecuencias positivas y adversas que esa decisión pueda acarrear para el futuro pensional del potencial afiliado (CSJ SL19447-2017).

Así mismo ha precisado la corporación que esa responsabilidad recae en las AFP dada su doble calidad de sociedad de servicios financieros y de entidad de la seguridad social, pues de ello dependen claros intereses sociales, como la protección a la vejez, invalidez y muerte; y por ello, según lo ha previsto el legislador, su omisión conlleva la ineficacia del traslado.

Ahora, el deber de información de las AFP siempre ha existido como una garantía de los derechos del afiliado; la cual ha ido evolucionado con el paso del tiempo, generándose una mayor exigencia de manera gradual, que cubre tres períodos desde la expedición de la Ley 100 de 1993, a saber: i) de 1994 hasta 2009; ii) de 2009 hasta 2014 y, iii) de 2014 en adelante (CSJ SL1688-2019). (…)”.

Así mismo, el precedente de esa Alta Corte también ha sido enfático al decantar que **el cumplimiento del deber de información se juzga al momento del acto jurídico del traslado y no con posterioridad**, en virtud de la relevancia de la información que se exige, como lo dijo en Sentencia SL2908-2022 al considerar que:

“(…) Ahora, en torno a la existencia de asistencias, como aquellas de las que da cuenta el formato denominado «histórico de asesorías realizada al afiliado» (f.º 115, ibidem) o «la proyección de la pensión en el régimen de ahorro individual [confrontada con] la del régimen de prima media», del 30 de octubre de 2009 (f.º 150, ib), huelga recordar, que la Corte en las sentencias CSJ SL5595-2021; CSJ SL5252-2021; CSJ SL1017-2022 y CSJ SL843-2022, connotó que «[...] el deber de información también resulta exigible y predicable [en esos] escenarios en las cuales al afiliado se le debe ilustrar sobre las consecuencias positivas y negativas que su determinación puede acarrearle frente a su futura pensión».

Lo dicho, con la precisión de que el cabal cumplimiento de esa obligación, «[...] se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad», pues, al tenor de lo apuntado en la sentencia CSJ SL1688-2019, «[...] un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad», porque de lo contrario, al perder su conveniencia, «ello equivale a la ausencia de información». (…)”.

(Negrilla de la Sala).

De otro lado, en la misma decisión, el Alto Tribunal reiteró que incluso, la desidia de la parte a informarse sobre los regímenes pensionales, o sus condiciones personales y profesionales no convalidan el acto de traslado desinformado, argumentando que: *“(…) Allende a que, como se estableció en la sentencia CSJ SL3349-2021, el incumplimiento del deber en referencia, ni siquiera se sana con: i) la «desidia del interesado en indagar por las condiciones y características» de ambos sistemas prestacionales a efectos de adoptar una decisión ilustrada; ii) los traslados horizontales que se realizaran entre AFP privadas e*

incluso del RPMPD y, iii) la profesión y condiciones de adiestramiento del afiliado, concluyendo que, en ningún evento es posible la subsanación de un acto jurídico que, por imperativo legal, no puede producir efectos (...)". (Subraya de la Sala).

A tono con lo anterior, en cuanto a la teoría de los actos de relacionamiento o de pertenencia, con los que apuntó la Juez, la parte acentuó su intención de pertenecer al RAIS, es menester recordar que dicha postura fue recogida y corregida de tiempo atrás por la Corte Suprema de Justicia, que reiteró de manera categórica en la Sentencia SL2565-2022 lo siguiente:

"(...) Y, en la sentencia CSJ SL1561-2022, en punto de los actos de relacionamiento, precisó que, aunque en las providencias CSJ SL3752-2020, CSJ SL4934-2020, CSJ SL1008-2021, CSJ SL1061-2021, CSJ SL2439-2021, CSJ SL2440-2021, CSJ SL2753-2021, se aludió a ese término para convalidar la migración de régimen que carece de la información debida, por inferirse que los traslados horizontales permitía colegir «cierto nivel de conocimiento sobre los efectos que dicha decisión comporta», tal postura debía ser recogida y corregida, puesto que

[...] la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento [...] el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, [por tanto], al estar afectado el acto jurídico inicial, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación, entre ellos los traslados que se efectúen entre los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia consiste en que, trae consigo la vuelta al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Además, la asesoría eficiente, verídica, obviamente no implica una proyección con un dato futuro exacto, y eso no es lo que se ha extrañado en estos casos, sino la falta total de prueba acerca de cuál fue esa información ofrecida a la posible afiliada, real, veraz, que representaba un ejercicio claro, con los supuestos del momento en que se estaba llevando a cabo, lo que le implicaba exponer bajo las condiciones vigentes, cómo serían las posibles prestaciones que obtendría el aspirante a vinculación en el régimen. Un ejercicio sensato que evidenciara para él, cuáles serían sus expectativas pensionales futuras, de optar por la entidad (CSJ SL1688-2019).

Aúnese también que, si bien es cierto, la cuestión a probar en asuntos como el estudiado no está sujeta a prueba netamente documental, recuerda la Sala que, al no establecerse tarifa legal de prueba, la AFP mencionada está en la posibilidad de demostrar el cumplimiento del deber de información por cualquiera de los medios admisibles.

Sin embargo, salta de bulto en el actual litigio, que el ente administrador del RAIS no logró demostrar de qué modo satisfizo la obligación a su cargo, en lo relativo a la información e ilustración precisa que debió suministrar a la accionante, al momento de cumplir la afiliación al RAIS, carga insatisfecha que impide a este Juez Colegiado identificar que el traslado se efectuó con total transparencia y en las condiciones explicadas.

Se observa así en el presente asunto, el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la AFP, de otorgar toda la información relacionada con el régimen al cual pretendía afiliarse, a fin de brindar a la usuaria la ilustración necesaria para que esta tomara la mejor decisión, sin que el legislador prevea como sanción para la afiliada, la permanencia en una administradora de pensiones, en perjuicio de su posibilidad de adquirir una prestación en mejores condiciones, más aún cuando es sabido que al tratarse de la parte débil de esa relación, las normas deben aplicarse bajo la hermenéutica del principio de favorabilidad respecto de los afiliados.

Ahora bien, también es pertinente señalar que, la antigüedad de la vinculación al RAIS de la accionante, no tiene la entidad de sanear la afiliación irregular, pues se reitera que en el asunto analizado, existe la certeza que cuando aquella se afilió a la AFP, no le fue suministrada una información clara, cierta, comprensible y oportuna, precisando las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional,

el cual no se convalida con el paso del tiempo, ni por traslados a otros fondos dentro del mismo régimen pensional, y mucho menos con la reasesoría brindada (f.68 a 70 Archivo 10 ED), pues no puede sanearse lo que feneció al nacer (CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021).

En armonía con ello, tampoco puede considerarse que la falta de reclamación en el transcurso de su afiliación puede convalidar las deficiencias de la AFP, pues es precisamente cuando ya se encuentra *ad-portas* de causar el derecho pensional, que advierte sobre las promesas vanas que la llevaron a aceptar el traslado al RAIS, en comparación con las condiciones que inicialmente tuvo en el régimen de prima media, y que encuentra en la ineficacia enrostrada, la única oportunidad de recuperar estas prerrogativas, independientemente de que le falten 10 años o menos para adquirir el derecho pensional.

Con todo, estima la Sala que, al no haberse demostrado por parte de **PROTECCIÓN S.A.** el cumplimiento de las obligaciones legales para con su afiliada, la vinculación del actor al RAIS emerge como ineficaz, lo que deriva entonces en la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y disponer el restablecimiento de la afiliación a su estado original, esto es, al régimen de prima media, independientemente de la prohibición contenida en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003.

La consecuencia práctica de la ineficacia es restarle todo efecto a ese acto, con la salvedad hecha en relación con algunos aspectos como los relativos a las prestaciones periódicas percibidas por el asegurado y la garantía de sostenibilidad del fondo común de naturaleza pública, dado el carácter tuitivo del derecho a la seguridad social, que implica además que a ese fondo deban retornarse todos los emolumentos percibidos por concepto de los aportes, tales como rendimientos, gastos de administración y primas, que derivan de las cotizaciones realizadas por el accionante, con lo que se desestiman los argumentos de las demandadas. En apoyo de este pronunciamiento se traen a colación las sentencias CSJ SL17595-2017; CSJ SL4989-2018; CSJ SL1688-2019 y CSJ SL8777-2020.

Lo anterior, en secuencia de lo concluido por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, que dista de las consecuencias que pretende derivar la AFP accionada, para quien ningún emolumento distinto a los aportes y sus respectivos rendimientos deben ser objeto de devolución al fondo del RPMPD, frente a lo cual se tiene la postura que de tiempo atrás viene siendo pacífica, reiterada por ejemplo en la Sentencia SL2613-2022 en la que se dijo:

“(…) En el presente asunto, el a quo declaró la ineficacia del traslado de la actora del RPM al RAIS; en lo que hace a las consecuencias de la precedente declaración, la Sala precisa que se concretan a que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes del acto ineficaz, con los efectos jurídicos y económicos que comporten, tal como se dejó sentado, entre otras, en las sentencias CSJ SL17595-2017, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1688-2019, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, lo que en la práctica significa que el traslado nunca ocurrió.

(…)

En efecto, de cara a los efectos jurídicos que conlleva la ineficacia del acto, la Corte ha precisado que:

La declaratoria de ineficacia, hace que las partes, en lo posible, vuelvan al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación. O, dicho de otro modo, el propósito es retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás, es decir con ineficacia ex tunc (desde siempre).

Por tal motivo, ante esta declaratoria, la AFP debe trasladar a Colpensiones la totalidad de los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual de la demandante junto con sus rendimientos. De igual modo, la citada AFP deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, pues estos conceptos, desde el

nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJ SL1688-2019). (CSJ SL4062-2021) (...)”

Luego, en Sentencia SL1019-2022 describió los lineamientos vertidos al respecto, a saber:

“(…) i) la ineficacia declarada involucra la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, en el sentido que debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación económica a que tenga derecho la demandante en el RPM.

ii) que ello incluye el reintegro a Colpensiones, además de lo consignado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales, lo recaudado por gastos de administración y comisiones debidamente indexados durante todo el tiempo que la promotora del proceso permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.

iii) que los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, conlleva que todas las cotizaciones efectuadas por la promotora del proceso al Sistema General de Pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al RPM, administrado por Colpensiones. (...)”.

En la misma senda, habida cuenta que la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como fundamento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, la afectación del acto jurídico primigenio transmite la falencia a los negocios jurídicos subyacentes, esto es, a los cambios efectuados a los diversos fondos privados, ello por cuanto el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al *statu quo*, lo que representa que la situación se retrotrae al estado en que se hallaría de no haberse presentado el cambio de sistema pensional (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021 y CSJ SL 4064-2021).

En este orden de ideas, al declararse la ineficacia de la afiliación al RAIS por el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de la AFP demandada, no hay razones para que **PROTECCIÓN S.A.** no traslade al régimen de prima media todos los valores recibidos y generados con ocasión de la viciada afiliación de la actora, pues no retornarlos constituiría un enriquecimiento sin causa para esta entidad, en perjuicio de **COLPENSIONES**, quien al recibir a la solicitante bajo las particulares condiciones de la ineficacia del traslado, se ve compelido a asumir las prestaciones derivadas del RPMPD, respecto de una persona que ya no se presupuestaba legalmente que estaría a cargo de ese régimen, por lo que debe acopiar los aportes que debieron realizarse al sistema de una manera completa, lo que impone incluir el porcentaje destinado a gastos de administración, fondo para la garantía de pensión mínima y primas, todo en procura de impedir la configuración del detrimento de dicha entidad. (CSJ SL2877-2022)

Frente a este último aspecto, se ha indicado acorde con la jurisprudencia, que toda vez que la ineficacia de la afiliación fue originada en la conducta indebida de la administradora, ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales deberán ser asumidos por **PROTECCIÓN S.A.** con cargo a su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C. Véase sobre el particular, Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, el 9 de septiembre de 2008, con radicación 31989 y SL1688 de 2019.

Resulta relevante mencionar que, entre los valores a remitir a **COLPENSIONES**, deben incluirse indefectiblemente los citados gastos recibidos por **PROTECCIÓN S.A.**, pues, si bien es cierto, tanto el Literal B del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, como el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 – compilado en el Decreto 1833 de 2016, no contemplan el traspaso de estos recursos una vez se produce el traslado de régimen pensional, no se puede pasar por alto

que la normativa en comento está direccionada a regular situaciones jurídicas que al cumplir con las exigencias legales para su materialización, surten plenos efectos.

Denotando que tal circunstancia no es la acaecida en el presente asunto, por cuanto se parte de un traslado imperfecto, que se reitera, no llenó las exigencias legales para su consolidación, debido al incumplimiento de la AFP en su deber de información, generando como consecuencia que dicho acto sea ineficaz, y así mismo, por efectos de lo señalado en el ordenamiento legal y la intención del demandante, deba disponerse su afiliación al RPMPD, hecho respecto del cual no debe acudir la Sala a estudiar otras cuestiones como la correcta o incorrecta administración de los recursos por parte del fondo de pensiones.

De igual forma, tampoco debe verificarse si lo correspondiente a los gastos de administración no reposa en las arcas de la entidad, en atención a las pólizas y seguros contratadas por la administradora del RAIS, pues desde el acto irregular, los mismos debieron efectuarse al RPMPD. De ahí que las AFP deban responder por tales gastos, como se dijo en precedencia, con cargo a su propio peculio (Sentencias SL1421-2019, SL1688-2019 y recientemente en la SL638-2020 del 26 de febrero de 2020).

En lo relativo a los **rendimientos** debe indicarse que estos se generaron sobre el capital ahorrado por el afiliado, hacen parte de ese capital, como lo norma el artículo 63 de la ley 100 de 1993, los cuales, de haber permanecido en el régimen de prima media también habrían tenido que producirse allí, integrándose al fondo común de naturaleza pública que conforman tales aportes, para la garantía de las prestaciones del régimen solidario, por lo que de ningún modo podría desarticularse los aportes para dejar estos emolumentos en el fondo privado, como si le pertenecieran a este.

Sobre las **restituciones mutuas**, hay que decir que, en especial cuando se trata de sumas de dinero y específicamente para los aportes al sistema de seguridad social, es menester considerar su significación económica, que no es otra cosa que los rendimientos que debieron producir esos aportes en el fondo que los debió administrar, de haber permanecido en su poder durante todo el término, por lo que no es extraño que la devolución de los aportes involucre de suyo la obligación de retornar tales frutos, rendimientos que en el régimen de prima media entran a formar parte del fondo común de naturaleza pública, régimen solidario que se nutre de tales rendimientos para garantía de su sostenibilidad, por lo que tampoco resulta válido estimar que se constituye en un enriquecimiento sin causa para **COLPENSIONES** y menos para la parte actora. (CSJ SL1688-2019; CSJ SL1465-2021).

En hilo con lo anterior, para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir igualmente el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS, pues así está dispuesto en el artículo 2.2.2.4.7. del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016.

En este orden de ideas, le asiste razón a la parte apelante en cuanto a la procedencia de la ineficacia del traslado propuesta, así como las consecuencias económicas que para estos asuntos ha trazado la Jurisprudencia. Por consiguiente, habrá de revocarse la decisión de primera instancia, para en su lugar:

- Declarar la ineficacia del traslado realizado por la señora **OFELIA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ ESCOBAR** desde el RPMPD al RAIS administrado por **PROTECCIÓN S.A.** En consecuencia, debe entenderse que se encuentra válidamente vinculada al régimen de prima media con prestación definida a través de **COLPENSIONES**, entendiendo que su continuidad se mantuvo.
- Condenar a **PROTECCIÓN S.A.** a que traslade a **COLPENSIONES**, el saldo existente en la cuenta de ahorro individual de la demandante, con todos sus frutos, rendimientos y bonos pensionales; y que asuma con cargo a sus propios recursos lo recibido por comisiones y gastos de administración, los valores

utilizados en seguros previsionales y garantía de pensión mínima, durante todo el tiempo que estuvo afiliada a dicha entidad, sumas que deben pagarse debidamente indexadas.

Al momento de cumplir dicho mandato por parte de la AFP, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, en los términos del artículo 2.2.2.4.8 decreto 1833 de 2016. (SL1563-2022, SL1928-2022, SL4070-2022).

- En concordancia con lo anterior, se ordenará a **COLPENSIONES** que reciba de **PROTECCIÓN S.A.** los dineros antes mencionados y los integre al fondo común que administra, y el que tiempo cotizado a la AFP se refleje en la historia laboral del demandante.

En relación con la excepción de prescripción, de entrada debe decirse que esta no cuenta con vocación de prosperidad atendiendo el hecho que la recuperación del régimen de prima media y la libertad de movilidad del sistema pensional, son pretensiones de carácter declarativo, que además hacen relación a derechos que no están sometidos al efecto extintivo del paso del tiempo, pues al tratarse de una condición inherente al derecho a la prestación del sistema de seguridad social en pensiones, la acción de nulidad se encuentra revestida de la imprescriptibilidad que se le imprime al derecho a la seguridad social por el artículo 48 de la Constitución Nacional (CSJ SL sentencia del 30 de abril de 2014, radicación 43892).

Así mismo, en lo relativo a los gastos de administración y demás emolumentos que componen los aportes objeto de devolución, que según lo decantado por la jurisprudencia entran a formar parte del fondo común de naturaleza publica conformado para garantía de las pensiones del régimen de prima media con prestación definida, adquieren el carácter de recursos imprescriptibles en atención a su vocación de servir a la financiación de las prestaciones del régimen (CSJ SL2877-2020)

Consecuencia de lo hasta aquí expuesto, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda en los términos planteados en líneas anteriores. Costas de ambas instancias a cargo de **PROTECCIÓN S.A.**, incluyendo como agencias en derecho de esta sede la suma equivalente a UN (1) SMMLV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E

REVOCAR la Sentencia N° 203 del 25 de agosto de 2023 proferida por el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, para en su lugar:

PRIMERO: DECLARAR la ineficacia del traslado realizado por la señora **OFELIA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ ESCOBAR** desde el RPMPD al RAIS administrado por **PROTECCIÓN S.A.** En consecuencia, debe entenderse que se encuentra válidamente vinculada al régimen de prima media con prestación definida a través de **COLPENSIONES**, coligiendo que su continuidad se mantuvo.

SEGUNDO: CONDENAR a **PROTECCIÓN S.A.** a que traslade a **COLPENSIONES** el saldo existente en la cuenta de ahorro individual de la demandante, durante todo el tiempo que estuvo afiliada a dicha entidad, con todos sus frutos, rendimientos y bonos pensionales; incluyendo el valor de las cuotas de administración, aportes al fondo de garantía de pensión mínima y al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia, estos tres últimos con cargo a sus propios recursos e indexados.


Al momento de cumplir dicho mandato por parte de la AFP, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, en los términos del artículo 2.2.2.4.8 decreto 1833 de 2016,

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES que reciba de **PROTECCIÓN S.A.** los dineros antes mencionados y los integre al fondo común que administra, reflejando en la historia laboral de la demandante los periodos de cotización realizados al RAIS.

CUARTO: Las **COSTAS** de ambas instancias están a cargo de **PROTECCIÓN S.A.**, incluyendo como agencias de esta sede la suma equivalente a UN (1) SMMLV.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA